INFORMACIONS

SETMANARI ANDORRÀ

NÚM. 010 | MULTILINGÜE

26 OCTUBRE - 1 NOVEMBRE 2026

informacions.ad

INVESTIGACIÓ

BINANCE: 6.300 MILLONES ROBADOS Y UNA CERRADURA QUE NADIE EXPLICA



Imatge original de la publicació / miniatura del vídeo

El mayor robo cripto de la historia no dejó escombros ni cajas fuertes reventadas. El 29 de octubre de 2026, a partir de las 20:05 UTC, una fortuna cercana a los 6.300 millones de dólares comenzó a salir de los monederos de Binance. La mayor parte desapareció de su control en apenas veinte minutos. Las transferencias quedaron inscritas en una blockchain pública y, aun así, nadie detuvo a tiempo el vaciado.

TRM Labs estimó el botín en unos 6.360 millones de dólares, repartidos entre diez redes. Elliptic amplió la reconstrucción a once y calculó 6.430 millones. Son diferencias de método, no dos robos. Lo decisivo: Binance aceptó órdenes válidas para la red, pero ilegítimas.

TEXT ÍNTEGRE | PÀGINA 2

EN AQUEST NÚMERO

INVESTIGACIÓ | P. 3

Diego Guirao: el piloto que desafió a 28 aviones y dejó un hijo al que nunca conocería

JUSTÍCIA | P. 4

JUSTICIA CONTRA PRENSA: EL PRECIO DE CUESTIONAR A LOS JUECES EN ANDORRA

JUSTÍCIA | P. 5

ANDORRA: DOS SENTENCIAS ANULADAS Y SEIS MILLONES EN EL AIRE | VALL BANC–PLEYADE 21

JUSTÍCIA | P. 7

THE LAW THAT PROMISED A HOME — AND THE JUDICIARY THAT ANSWERED THE PRESS

INVESTIGACIÓ

BINANCE: 6.300 MILLONES ROBADOS Y UNA CERRADURA QUE NADIE EXPLICA

No es época para tontos | 2026-11-01 | CASTELLÀ



Imatge: miniatura original de la publicació.

El mayor robo cripto de la historia no dejó escombros ni cajas fuertes reventadas. El 29 de octubre de 2026, a partir de las 20:05 UTC, una fortuna cercana a los 6.300 millones de dólares comenzó a salir de los monederos de Binance. La mayor parte desapareció de su control en apenas veinte minutos. Las transferencias quedaron inscritas en una blockchain pública y, aun así, nadie detuvo a tiempo el vaciado.

TRM Labs estimó el botín en unos 6.360 millones de dólares, repartidos entre diez redes. Elliptic amplió la reconstrucción a once y calculó 6.430 millones. Son diferencias de método, no dos robos. Lo decisivo: Binance aceptó órdenes válidas para la red, pero ilegítimas.

En Ethereum apareció la huella más desconcertante. Los atacantes utilizaron una función legítima, EIP-7702, que permite delegar el comportamiento de determinadas cuentas. Presentaron cincuenta autorizaciones firmadas; una encajó con el estado del monedero conocido como «Binance 14». Una sola transacción extrajo unos 2.530 millones. Ethereum no falló matemáticamente: una firma válida abrió la puerta al ladrón.

¿Quién generó aquellas autorizaciones? ¿Cómo llegaron a manos del atacante? ¿Falló la gestión de claves, un servicio de firma o la cadena interna de aprobaciones? La evidencia pública aún no permite resolverlo. Y el problema excede Ethereum: también salieron unos 18.270 bitcoins y grandes cantidades de activos de Tron, XRP y otras redes. Un único truco de programación no explica por sí solo semejante coordinación.

Después comenzó otra carrera, la del dinero contra quienes intentaban inmovilizarlo. Los atacantes fragmentaron fondos, encadenaron direcciones de bitcoin y automatizaron movimientos entre redes. Elliptic verificó hasta el 1 de noviembre alrededor de 2.850 millones de dólares congelados o intervenidos, aproximadamente el 44 % de su estimación del robo. Las stablecoins permitieron bloquear enormes cantidades porque sus emisores conservan capacidades de control. He aquí la ironía: una industria que promete eliminar intermediarios tuvo que recurrir a ellos para frenar el desastre.

Pero congelar no significa recuperar. Un token bloqueado no ha vuelto a su dueño. Tampoco significa recuperar el anuncio de Binance de que había repuesto aproximadamente el 95 % de los activos afectados. Binance recurrió a fondos propios y de protección y aseguró que los principales activos de sus clientes estaban respaldados. Eso puede evitar pérdidas individuales; no demuestra que la custodia fuese segura. Una prueba de reservas tomada después de la crisis tampoco sustituye una auditoría independiente de todos los pasivos y controles.

La reacción de los clientes fue elocuente. Tras la reapertura gradual de retiradas, Reuters informó de más de 3.500 millones de dólares de salidas netas, según DefiLlama. No es prueba de insolvencia, pero sí de algo imposible de comprar con una campaña de comunicación: confianza. El cliente solo quiere saber si su dinero seguirá allí mañana.

El FBI atribuyó oficialmente el ataque a TraderTraitor, vinculado a Corea del Norte. TRM Labs y otros investigadores identificaron patrones y rutas compatibles con esa atribución, incluido el cruce de fondos con otro robo anterior. Es una atribución de peso. Pero poner nombre al presunto ladrón no revela quién controlaba los firmantes dentro de Binance ni por qué fallaron las alarmas.

El contexto político añade sombras, no pruebas del atraco. Binance arrastraba su acuerdo penal estadounidense de 2023. En 2025, MGX anunció una inversión de 2.000 millones de dólares en la plataforma, articulada mediante USD1, moneda vinculada a World Liberty Financial y al entorno de Donald Trump. Ese mismo año Trump indultó al fundador Changpeng Zhao. Son hechos que merecen escrutinio, pero no prueban relación con el robo. De hecho, World Liberty bloqueó fondos de USD1 atribuidos al atacante. Las opciones bajistas posteriores al inicio tampoco prueban información

privilegiada: la blockchain podía alertar a operadores antes que la prensa.

La exigencia final es sencilla e incómoda: publicar una investigación técnica independiente, explicar quién produjo las cincuenta autorizaciones, qué controles debían impedir su uso, cuándo saltaron las alarmas y cómo reaccionaron los responsables. Reconstruir cada alerta y conciliar hasta el último dólar. Porque hay cinco realidades distintas: dinero robado, rastreado, congelado, repuesto y realmente devuelto. Confundirlas puede calmar un titular, pero no restituye la verdad.

La blockchain no ocultó la huida: mostró las transferencias al mundo entero. Lo que sigue sin explicar la empresa con el detalle exigible es por qué el sistema autorizó aquella salida y cómo evitará que vuelva a ocurrir.

Article original: informacions.ad | Vídeo original

Diego Guirao: el piloto que desafió a 28 aviones y dejó un hijo al que nunca conocería

No es época para tontos | 2026-10-31 | CASTELLÀ



Imatge: miniatura original de la publicació.

El 5 de marzo de 1938, un muchacho de diecinueve años volaba solo en un Polikarpov I-15 «Chato» ante una fuerza desmesurada: dieciocho bombarderos alemanes Heinkel He 111 protegidos por diez cazas Messerschmitt. El episodio figura en el estado de servicios de Diego Guirao González, piloto de la 4.ª Escuadrilla del Grupo 26 de la aviación republicana. El documento le atribuye el derribo de uno de aquellos bimotores, una lucha de unos veinte minutos contra la escolta y el regreso a su base casi sin combustible. Su mando lo felicitó y propuso un ascenso. Detrás de esas pocas líneas administrativas se esconde una experiencia humana difícil de imaginar.

El «Chato» era una máquina ágil y vulnerable. Llevaba un motor radial soviético Shvetsov M-25, dos alas, tren de aterrizaje fijo, una cabina abierta al viento y cuatro ametralladoras de 7,62 milímetros. Alcanzaba unos 360 km/h. Los Heinkel, cargados de bombas, podían desarrollar velocidades comparables y contaban con artilleros que protegían distintos sectores. Los Messerschmitt, más rápidos, podían atacar desde arriba y aprovechar su ventaja de energía. Para llegar hasta un bombardero, Diego debía escoger un ángulo de aproximación, calcular dónde estaría el blanco cuando llegaran las balas, disparar en una ventana de segundos y salir antes de quedar bajo el fuego enemigo. Veintiocho aparatos no podían dispararle a la vez, pero cada maniobra para escapar de uno podía entregarlo a otro.

Veinte minutos en ese espacio tridimensional no son veinte minutos apretando un gatillo. Son un ejercicio extenuante de visión periférica, cálculo, coordinación y resistencia física. Los virajes multiplican el peso del cuerpo, estrechan la visión y consumen velocidad. No había radar que avisara de un enemigo a la espalda. Y el motor, exigido a máxima potencia, consumía el combustible necesario para regresar. El informe no permite reconstruir cada viraje ni identificar el número de serie del Heinkel abatido. Sí acredita que aquel joven entró solo en una formación abrumadoramente superior, sobrevivió a la respuesta de los cazas y encontró el camino de vuelta cuando su depósito se vaciaba.

Diego había nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1918, hijo de Francisco y Virtudes, y hermano de Lorenzo Guirao, conocido en los ruedos como Morenito de Córdoba. La sublevación de 1936 convirtió su juventud en una carrera contra el tiempo. La Alemania nazi y la Italia fascista apoyaban a Franco; la República buscó aviones y formación en la URSS. El pasaporte auténtico de Diego conserva los sellos de aquel desplazamiento de 1937, entre Francia y Odesa. Obtuvo el título el 20 de noviembre de 1937, y su expediente acabaría registrando apenas noventa y tres horas de vuelo de escuela. Poco después estaba combatiendo contra aviadores mucho más experimentados.

En su 4.ª Escuadrilla, mandada por Ladislao Duarte Espés, los mecánicos mantenían operativos los «Chatos» entre campos de aviación improvisados, mientras las patrullas protegían tropas, carreteras y aparatos de reconocimiento. Allí sirvió también Rómulo Negrín, hijo de Juan Negrín, presidente del Gobierno republicano. Cuatro días después, el 9 de marzo, comenzaría la ofensiva franquista de Aragón. Su combate no decidió la guerra, pero

retrata a quienes impedían que los bombarderos volaran sin oposición.

La guerra continuó cobrándole su precio. Su estado de servicios le reconoció otros dos Messerschmitt derribados los días 13 y 14 de marzo. El 7 de abril, el fuego antiaéreo le hirió en la pierna izquierda; el 24 regresó al frente como jefe de patrulla. Vivió la campaña del Ebro, la retirada de Cataluña y el agotamiento de la aviación republicana. Su balance militar consignaría 322 horas de vuelo en el frente, 59 combates y cinco victorias personales atribuidas. El 5 de febrero de 1939, la 4.ª Escuadrilla aterrizó en Carcasona, Francia. Al otro lado de la frontera dejó de ser combatiente y se convirtió en exiliado.

Marsella fue el escenario de su segunda vida. Allí se casó con Rafaela Alarcón, nació su hija María y Diego regresó al universo taurino de su familia. Había sobrevivido a una guerra en el aire y, sin embargo, murió después de una cornada en tiempos de paz, una paradoja que la prensa recordó décadas más tarde. Rafaela estaba embarazada cuando él falleció. Robert Guirao Alarcón, el hijo póstumo, creció sin haber visto jamás el rostro vivo de su padre. Su nieto Josep Guirao reúne hoy el pasaporte, las hojas de vuelo y los expedientes militares para rescatar su historia.

En el expediente, aquella proeza ocupa unas líneas; en la familia, ha ocupado generaciones. Robert nunca escuchó la voz de su padre; Josep busca ahora en sus papeles la vida que no pudieron contarle. El 5 de marzo de 1938, Diego encontró el camino de regreso. Ochenta y ocho años después, su nieto recorre ese camino en sentido contrario, hacia el hombre que nunca llegó a conocer.

Article original: informacions.ad | Vídeo original

JUSTÍCIA

JUSTICIA CONTRA PRENSA: EL PRECIO DE CUESTIONAR A LOS JUECES EN ANDORRA

No es época para tontos | 2026-10-28 | CASTELLÀ



Imatge: miniatura original de la publicació.

En un país pequeño, hay una imagen más perturbadora que un desahucio: la del órgano que gobierna a los jueces saliendo a combatir al periodista que cuestiona sus sentencias. No hace falta prohibir un artículo para enfriar la libertad de prensa. Basta con exhibir quién tiene el poder.

El 27 de octubre de 2026, el Consell Superior de la Justícia (CSJ) envió a Altaveu una extensa réplica a dos artículos de Gabriel Pérez. La nota no lo nombra, pero recalca que ambos los firmó el mismo redactor y le atribuye graves errores. Rectificar falsedades es legítimo. Lo inquietante es que el gobierno judicial asuma la defensa pública de una interpretación discutida. ¿Desde cuándo cuestionar una sentencia obliga a enfrentarse al aparato que administra a los jueces?

La sentencia 51/2026, del 12 de mayo, confirmó la extinción de un alquiler tras un aviso de no renovación al que el arrendatario no se opuso. La firmaron Vincent Anière, ponente, Jaume Tor Porta y Carles Cruz Moratones. La 95/2026, del 13 de septiembre, firmada por los mismos magistrados, con Tor como ponente, rechazó otra expulsión: el propietario no había explicado suficientemente las obras previstas. Son casos distintos: vencimiento frente a resolución anticipada. El CSJ acierta en la distinción, pero el debate no termina ahí.

En 2022, la legislación decía que el inquilino «pot exigir» una prórroga. La Ley 24/2023 pasó a decir «s'aplica», al regular las prolongaciones en ausencia de acuerdo. ¿Puede perderse esa protección si el inquilino no responde a un aviso con la fórmula adecuada? La Sala invoca las reglas generales del arrendamiento y una doctrina judicial

anterior para exigir oposición expresa. No es un invento arbitrario; sí una interpretación discutible cuando la vivienda depende de conocimientos procesales. Una puerta que el Parlamento diseñó para abrirse automáticamente no debería exigir una contraseña invisible.

El tribunal consideró acreditados, mediante certificado, foto y vídeo, depósitos de comunicaciones en el buzón los días 10 y 13 de junio de 2025; el arrendatario discrepó. Sí es legítimo preguntar por su efecto: ¿basta recibir un aviso y guardar silencio para perder una protección legal? Discutir esa conclusión no es atacar a los jueces. Es hacer periodismo sobre sus decisiones.

El Tribunal Constitucional inadmitió el amparo 2026-79-RE el 12 de octubre. Lo firmaron Pere Pastor Vilanova, Víctor Torre de Silva López de Letona, Jean-Yves Caullet y Joan Manel Abril Campoy. No resolvió de nuevo la controversia de legalidad ordinaria: consideró que el recurso carecía de contenido constitucional suficiente. Convertir esa inadmisión en la prueba de que cualquier interpretación del Superior resulta intocable es confundir control constitucional con obediencia intelectual.

El CSJ, presidido por Josep Maria Rossell Pons, no es una sala que juzga recursos. Es el órgano de gobierno de la Justicia. Puede aclarar hechos, pero ¿era proporcionado movilizar su autoridad para refutar a un reportero de un medio pequeño? No es censura por sí sola. Pero una disputa así recuerda al periodista el precio de investigar a quien juzga.

Y el contexto obliga a extremar la vigilancia. El delito contra el prestigio de las instituciones existe desde 2005; en 2022 se agravó para ciertas difusiones por medios e internet y hoy está en el artículo 366 del Código Penal. Exige imputaciones hechas con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad; no penaliza la crítica fundada. No consta que se haya utilizado contra Pérez. Pero en marzo de 2026 el Comité de Derechos Humanos de la ONU alertó del efecto disuasorio de estas normas y reclamó evitar el hostigamiento judicial. Rossell fue ministro de Justicia e Interior entre 2019 y 2023. Esa continuidad de cargos merece escrutinio público, no acusaciones sin pruebas.

En «Morice contra Francia», Estrasburgo recordó que las críticas severas, apoyadas en una base fáctica suficiente, al funcionamiento de los tribunales forman parte de un debate protegido por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El prestigio judicial exige resistir las preguntas.

No hay prueba de censura consumada, amenaza penal a Gabriel Pérez ni alianza clandestina con propietarios. Sí hay una asimetría inquietante: un arrendatario cuya vivienda depende de un formalismo, un periodista que examina ese formalismo y una institución que utiliza su altavoz para corregirlo. Jaume Tor, Vincent Anière y Carles Cruz responden por sus sentencias mediante los cauces legales; Rossell Pons y el CSJ deben rendir cuentas sobre la proporcionalidad de su intervención pública.

Una Justicia que confunde la defensa de su autoridad con la defensa frente a la prensa olvida lo esencial: en democracia, el juez tiene la última palabra en un pleito, pero nunca la última palabra en el debate público.

Article original: informacions.ad | Vídeo original

ANDORRA: DOS SENTENCIAS ANULADAS Y SEIS MILLONES EN EL AIRE | VALL BANC–PLEYADE 21

No es época para tontos | 2026-10-27 | CASTELLÀ



Imatge: miniatura original de la publicació.

Imaginen que un banco les reclama seis millones de euros. Que, durante el juicio, reconoce que uno de los créditos fue cedido a un fondo de inversión. Que un tribunal le da la razón, pero el Superior anula la sentencia y devuelve el procedimiento. Luego la Batllia dicta otra sentencia y el Superior vuelve a anularla. Bienvenidos al ping-pong judicial andorrano: la pelota vale millones.

La historia comienza en 2018. Vall Banc reclama a Josep-Maria Loan Fité cuatro operaciones crediticias por 5.735.225,29 euros, antes de intereses posteriores. Pero en septiembre de 2019 la propia entidad reconoce judicialmente que uno de esos créditos había sido titulizado y cedido a un

fondo, aunque conservaba funciones de cobro. Gestionar un cobro ajeno puede ser perfectamente legal. La cuestión decisiva es otra: ¿en nombre de quién se reclama, con qué título y para beneficio de quién?

Después Pleyade 21 pretende suceder a Vall Banc. En mayo de 2023, la Batllia dicta una primera sentencia favorable a la reclamación. El 8 de abril de 2025, el Tribunal Superior anula esa sentencia y la resolución sobre sucesión procesal. La tarea: acreditar la transmisión de los créditos y permitir a la defensa discutirlo. Cuatro contratos y documentos verificables. ¿Tanto pedir?

El segundo set resulta más inquietante. En septiembre de 2025, la Batllia, en formación colegiada y con Nadia Alís Cirera como ponente, valora documentación aportada por Pleyade 21 sin dar antes a la otra parte la audiencia que el propio tribunal había ordenado. El día 16 admite la sucesión procesal; el 24 resuelve el desistimiento y el 29 dicta una nueva sentencia. Todo antes de que quedaran definitivamente resueltas las impugnaciones de decisiones anteriores.

El 9 de octubre de 2026, el Superior interviene de nuevo. Declara nulos de pleno derecho los autos de 16 y 24 de septiembre y la segunda sentencia. No es una disputa sobre una errata: constata «indefensión material efectiva». Los recursos de reposición terminaron desestimados meses después sin respuesta sobre su fondo. El Superior precisa que estas infracciones no prueban por sí solas parcialidad. Pero reincidir en defectos procesales tras una primera anulación exige explicaciones.

Y mientras los tribunales se pasan la pelota, surge la otra historia: el fondo inmobiliario. Los datos aportados muestran una caída histórica del 89,34 % en el valor de sus participaciones. Eso no demuestra un robo ni significa que desapareciera ese porcentaje de dinero en efectivo. Exige cuentas auditadas, inventarios, cesiones, liquidación y destino de eventuales cobros. Gestora y depositario no son lo mismo. Disolver una gestora tampoco prueba la extinción del fondo.

Tampoco basta con invocar una escritura si tres referencias de activos transmitidos no se corresponden directamente con los cuatro códigos de los créditos reclamados. Tal vez existan códigos antiguos y nuevos para una misma operación. Que se aporte la equivalencia certificada. En la banca se exigen documentos hasta para abrir una cuenta; para reclamar millones no debería bastar la fe en un sistema informático invisible.

¿Dónde estuvo el control? ¿Qué verificó la Autoridad Financiera Andorrana? ¿Qué reflejan los expedientes de la AREB? ¿Qué corresponde examinar al Consell Superior de la Justícia después de dos sentencias anuladas? El Govern no puede ordenar a los jueces cómo fallar y los copríncipes no resuelven litigios privados. Pero nadie debería confundir independencia judicial con ausencia de rendición de cuentas.

Sí hubo prensa que informó sobre la última anulación. Falta investigar a fondo el origen de los créditos, la evolución del fondo y el destinatario legítimo de los cobros. Publicar una noticia sobre una sentencia es periodismo. Seguir el dinero, contrastar las cuentas y exigir respuestas a cada institución también lo es, y es lo que este caso reclama.

Andorra vende al mundo seguridad jurídica y solvencia financiera. Esas palabras pierden valor si un tribunal debe corregir dos veces un procedimiento millonario y la documentación sobre el titular de un crédito sigue siendo motivo de controversia. Ningún inversor debería conformarse con un sello cuando lo que necesita es una cadena de propiedad comprobable.

Dos sentencias anuladas. Cuatro créditos. Un fondo con pérdidas extraordinarias. Ninguna prueba aquí de que alguien haya robado su patrimonio, pero preguntas que no admiten otra década de silencio: ¿de quién era cada crédito? ¿Quién estaba autorizado a cobrarlo? ¿Adónde habría ido cada euro recuperado? ¿Y quién responde por la indefensión que el propio Tribunal Superior declaró?

En el ping-pong, el árbitro ordena repetir el punto. En la justicia, repetir una sentencia nula significa repetir el daño. La pelota puede regresar a la mesa. La confianza, sin explicaciones, no.

Article original: informacions.ad | Vídeo original

THE LAW THAT PROMISED A HOME — AND THE JUDICIARY THAT ANSWERED THE PRESS

No es época para tontos | 2026-10-28 | ENGLISH



Imatge: miniatura original de la publicació.

In Andorra, the distance between a courtroom and a newsroom is measured in footsteps. The distance between a promise of protection and an eviction may be measured in a single verb.

The country's 2023 housing law was presented as a lifeline amid soaring rents. Earlier legislation said tenants "can demand" an extension. The revised formula said the extension "applies" when its conditions are met. Two words, two different ideas of citizenship: must a person know how to claim protection, or should the law protect them without a lawyer beside the letterbox?

On 12 May 2026, the Civil Chamber of Andorra's Superior Court delivered judgment 51/2026. A landlord gave notice that a lease would not be renewed; the tenant disputed receiving it. The court accepted courier evidence, including photographs and video, and found the notice effective. Because the tenant had not expressly objected and invoked the extension, the court upheld termination. The automatic safeguard came with a condition that someone reading the new law might never have imagined.

The judges — Vincent Anière, Jaume Tor Porta and Carles Cruz Moratones — had a legal argument. General tenancy law still required parties to communicate their positions; an emergency statute had not abolished the rules governing notice. But legal plausibility does not end public scrutiny. It begins it. If Parliament replaced "can demand" with "applies," why should the burden of demanding protection return through interpretation? What good is an automatic safety net if it opens only for those who know the password?

Then came judgment 95/2026, a different dispute: a landlord seeking early termination over alleged obstruction of building works. The same judges refused eviction, emphasizing the seriousness of removing people from their home and the inadequate explanation of the works. The cases are not legally identical. But their contrast raises a legitimate question: why does proportionality speak so loudly when works are poorly explained, yet so softly when a tenant fails to answer a notice?

The first case leaves a troubling image: a mailbox. A notice, a letter, disputed deliveries, video evidence — the fate of a home filtered through what was deposited and when. The court considered the proof sufficient. The public can still ask whether the standard for ending a tenancy was matched by an equally exacting examination of the protection Parliament intended.

Reporter Gabriel Pérez of Altaveu asked uncomfortable questions. On 27 October, the Consell Superior de la Justícia, Andorra's judicial governing council, issued a lengthy rebuttal. It disputed the reporting and observed that the two stories were written by the "same reporter." It did not name Pérez, but he was identifiable. That distinction matters.

Courts are entitled to correct factual errors; journalists must answer for theirs. The council could explain why lease expiry differs from termination for breach. But why did the body governing the judiciary enter a public dispute as defender of a contested interpretation? Judges speak through judgments. Journalists scrutinize them. When the institution supervising the judges points toward the reporter, even indirectly, the imbalance is unmistakable.

The council is chaired by Josep Maria Rossell Pons, a former justice minister. There is no evidence he personally drafted the response, threatened anyone or colluded with property owners. But who approved the communiqué? Why this tone? Was institutional authority exercised with the restraint it demands? These are not conspiracy theories. They are questions power must answer.

Andorra's criminal law forms a disturbing backdrop. Provisions punishing knowingly false or recklessly untrue allegations damaging institutional prestige predate this affair; enhanced penalties for media dissemination were introduced in 2022. There is no evidence Pérez has been prosecuted under them. Yet in March 2026 the UN Human Rights Committee warned of criminal defamation's chilling

effect in Andorra, citing the prosecution and eventual acquittal of women's rights defender Vanessa Mendoza. In Morice v. France, Strasbourg defended robust, fact-based criticism of judges.

That is the danger: not necessarily a censor with a red pen, but an editor quietly deleting a paragraph; a reporter deciding the next investigation will cost too much; a tenant discovering that the state's promise of protection was written in a language only specialists could safely speak.

Andorra needs neither untouchable judges nor infallible journalists. It needs courts whose reasoning survives scrutiny, lawmakers who mean what they write, and a press free to ask why a home was lost. The question is not whether the judiciary may answer a newspaper. Of course it may. It is whether, in answering, it remembers that the power to judge is not the power to silence questions.

Article original: informacions.ad | Vídeo original

DUES SENTÈNCIES ANUL·LADES PEL CAS VALL BANC

No es época para tontos | 2026-10-27 | CATALÀ



Imatge: miniatura original de la publicació.

Imaginin-se que una entitat els reclama gairebé sis milions d'euros i reconeix judicialment que un crèdit s'ha cedit a un fons. Imaginin-se, després, que la Batllia dicta sentència, que el Tribunal Superior l'anul·la i ordena corregir-ne els defectes. Ara imaginin-se que es torna a dictar sentència i que el Superior l'ha de tornar a anul·lar. És una història real de la justícia andorrana.

El procediment 1000075/2018 va començar quan Vall Banc va reclamar a Josep-Maria Loan Fité quatre crèdits per 5.735.225,29 euros, sense interessos posteriors. El setembre de 2019, però, el banc va manifestar judicialment que un dels crèdits havia estat titulitzat i cedit a un fons, tot i gestionar-ne el cobrament. Aquí neix una pregunta elemental: qui és el titular, qui té facultats per cobrar i qui pot reclamar judicialment en nom propi? Són tres qüestions diferents. Un gestor pot cobrar per compte d'un tercer, però ha d'acreditar amb quin títol ho fa.

La història es complica amb l'aparició de Pleyade 21, que sol·licita succeir processalment Vall Banc. La Batllia dicta una primera sentència el 3 de maig de 2023. El 8 d'abril de 2025, el Tribunal Superior anul·la aquella sentència i la decisió sobre la successió processal. Cal tornar enrere i donar les garanties necessàries per acreditar la transmissió dels crèdits i escoltar la defensa. Però el segon intent també naufraga.

El setembre de 2025 sembla inversemblant, però consta en les resolucions. El dia 2, Pleyade 21 aporta documentació. El 16, el tribunal col·legiat de la Batllia, amb Nadia Alís Cirera com a ponent, reconeix la successió processal sense donar a la part demandada l'audiència prèvia que havia estat ordenada. El 24 resol sobre un desistiment i el 29 dicta una nova sentència. Mentrestant, els recursos de reposició no havien rebut una resposta de fons. Acabaran rebutjats el gener de 2026 per pèrdua sobrevinguda d'objecte.

El 9 d'octubre de 2026 arriba la segona devolució. En la sentència 000108/2026, la Sala Civil del Tribunal Superior declara nuls de ple dret els autes del 16 i el 24 de setembre i la sentència del 29. Constata una «indefensió material efectiva»: no es va permetre discutir abans de la decisió els documents sobre qui podia reclamar. El Superior també explica que aquestes infraccions no proven, per elles mateixes, parcialitat judicial. No acreditar intencionalitat no fa normal repetir dues vegades un procés milionari.

La defensa assenyala sis moments en què Vall Banc i després Pleyade 21 van poder aportar o aclarir la titularitat: la demanda, la prova del 2019, la petició de successió, la primera apel·lació, el requeriment de 2025 i les certificacions de setembre. No són sis terminis equivalents, però sí una successió d'ocasions per aclarir un extrem bàsic. La documentació sobre la transmissió cita tres identificadors d'actius que no coincideixen directament amb les quatre referències reclamades. Pot existir una equivalència tècnica perfectament legítima. La pregunta és on és la conciliació documental que permeti comprovar-la.

I darrere la disputa judicial hi ha el fons Vall Banc Fons Real Estate FI. Les dades aportades en mostren una caiguda històrica del 89,34% del valor per participació. Això no equival a dir que s'hagi robat el 89,34% del patrimoni: una pèrdua de valor

no és una prova d'apropiació. Però sí que exigeix preguntar pels comptes auditats, l'inventari d'actius, les transmissions i el destí dels eventuals cobraments. La gestora i el dipositari tenen funcions diferents, i la baixa d'una gestora no prova per si sola la liquidació definitiva del fons.

També hi ha preguntes institucionals. Què han supervisat l'AFA i l'AREB en relació amb aquests actius? Quina informació té el Consell Superior de la Justícia sobre les dues anul·lacions? Quines actuacions corresponen a la Fiscalia? El Govern no pot dictar sentències ni interferir en la independència dels jutges, però sí respondre sobre transparència i polítiques públiques dins de les seves competències. La premsa ha informat de l'anul·lació, però informar d'un revés judicial no és el mateix que seguir el rastre financer d'un crèdit fins a l'últim assentament comptable.

Andorra vol projectar confiança bancària i seguretat jurídica al món. Cap d'aquestes credencials no es reforça amb sentències anul·lades, defenses privades d'audiència i preguntes financeres que continuen obertes. Potser Pleyade acabarà acreditant els seus drets; potser una part de la reclamació prosperarà. Encara no hi ha resolució definitiva sobre el fons de totes aquestes qüestions. El que sí que hi ha són dues sentències anul·lades i una indefensió declarada pel mateix Tribunal Superior. En aquest ping-pong, la justícia pot ordenar repetir el punt. El que no pot exigir és que la ciutadania oblidi el marcador.

Article original: informacions.ad | Vídeo original

ANDORRA

ANDORRA: TWO JUDGMENTS OVERTURNED AND SIX MILLION EUROS HANGING IN THE BALANCE | VALL BANC–PLEYADE21

No es época para tontos | 2026-10-27 | ENGLISH



Imatge: miniatura original de la publicació.

Imagine a bank demanding six million euros, then acknowledging that one loan was transferred to an investment fund. The court rules for the bank; the Superior Court overturns it. The lower court rules again; the Superior Court overturns it again. Welcome to Andorra's judicial ping-pong championship: the ball is worth millions.

The story begins in 2018. Vall Banc claims €5,735,225.29 from Josep-Maria Loan Fité under four credit agreements, excluding later interest. In September 2019, however, the bank acknowledges in a court filing that one credit had been securitised and assigned to an investment fund, while Vall Banc continued managing its collection. Collecting another party's debt can be lawful. But who owned it, who had authority to sue, and who stood to benefit?

Pleyade 21 later seeks to replace Vall Banc as claimant. In May 2023, Andorra's Court of First Instance, the Batllia, delivers a judgment substantially upholding the claim. On April 8, 2025, the Superior Court annuls that judgment and the procedural succession decision. The transfer needs proof, and the defence must be able to challenge it. Surely that is elementary.

Then comes September 2025. The Batllia panel, with Nadia Alís Cirera as reporting judge, considers Pleyade 21's documents without granting the hearing it had itself ordered. On September 16 it

recognises Pleyade's procedural succession; on September 24 it rules on a withdrawal request; and on September 29 it issues another judgment. The earlier decisions are not yet final.

On October 9, 2026, the Superior Court intervenes once more. It declares the September 16 and 24 orders and the September 29 judgment null and void. Its finding is not about a misplaced comma: the defence suffered actual and effective procedural prejudice. Reconsideration appeals were dismissed months later without examination on the merits. The Superior Court explicitly says these violations do not themselves establish judicial bias. But two annulled judgments in one multimillion-euro case demand more than a shrug.

The question of ownership is still unresolved. Across the 2018 claim, the 2019 evidence, the succession application, the first appeal and the document submissions of 2025, Vall Banc and Pleyade 21 had repeated opportunities to clarify the chain of title. A subsequent certificate identifies three transferred assets whose references do not directly match the four loans claimed. Banking identifiers can change. Fine: produce a certified cross-reference. A bank demands documents to open an account; surely a claim for millions deserves at least as much paperwork.

Meanwhile, another question hangs over the case: the real estate investment fund. Financial records supplied for Vall Banc Fons Real Estate FI show a historical 89.34% decline in unit value. That is not evidence of theft or proof that 89.34% of its cash vanished. It demands audited accounts, inventories, assignment deeds and liquidation records. Who booked the credit, who could enforce it, and where would payments go? The manager and depositary are distinct; dissolving the manager does not prove the fund ended.

And where was the oversight? What did the Andorran Financial Authority verify? What do AREB's records show about the transfer of assets after the BPA crisis? What should the Consell Superior de la Justícia examine after two annulments? The Government cannot tell judges how to decide cases, and the Co-Princes do not settle private debt disputes. Judicial independence, however, cannot be a synonym for silence or a substitute for institutional accountability.

There was press coverage of the latest annulment. But reporting a court ruling is not the same as following a contested credit through a bank's restructuring, an investment fund and a corporate successor. Who has demanded the accounts, questioned the auditors and traced the money?

Andorra promotes itself internationally as a place of financial solidity and legal certainty. These claims ring hollow when a court has to send a multimillion-euro case back twice and a fundamental question about the chain of ownership remains disputed. Investors do not need reassuring seals. They need documents that withstand scrutiny.

Two judgments overturned. Four loans. An investment fund with extraordinary historical losses. No evidence here proves anyone stole the fund's assets. But three questions cannot wait another decade: who owned each credit, who could lawfully collect it, and who is accountable for the denial of defence rights confirmed by the Superior Court?

In table tennis, the referee can order a point to be replayed. In justice, repeating a void judgment means repeating the cost. The ball can return to the table. Trust, without answers, cannot.

Article original: informacions.ad | Vídeo original

SOCIETAT

ANDORRA 24 | Educació social, gestories, Farga Rossell i FLOC | 31.10.2026

No es época para tontos | 2026-10-31 | CATALÀ



Imatge: miniatura original de la publicació.

ANDORRA 24 — Edició de tarda del 31 d'octubre de 2026. Informatiu enregistrat d'Informacions.ad, en català.

Avui: protecció dels professionals de l'educació social; la proposta d'exigir experiència per dirigir gestories; la rehabilitació urgent de la Farga Rossell; i el festival de lectura infantil i juvenil FLOC. Distingim els fets confirmats de les qüestions pendents de contrast.

Presentadora virtual: Rachael, IA agèntica de Blaxxun. Veu sintètica: Sara Martin, creada amb ElevenLabs. Sincronització audiovisual: Runway. Aquesta peça és enregistrada; no és una emissió en directe.

Fonts consultades:
https://elperiodic.ad/societat/intervencions-en-solitari-insults-i-dades-personals-exposades-la-cara-menys-visible-de-leducacio-social-a-andorra/
https://www.altaveu.com/actualitat/economia/andorra-endavant-proposa-calguin-cinc-anys-experiencia-obrir-dirigir-gestoria_80705_102.html
https://seu.consellgeneral.ad/
https://www.govern.ad/es/w/actuacions-prioritaries-de-rehabilitacio-a-la-farga-rossell-per-reobrir-l-equipament-als-visitants
https://www.govern.ad/es/w/educacio-i-cultura-organitzen-un-nou-festival-de-lectura-infantil-i-juvenil-el-floc-per-acostar-els-llibres-als-infants-i-joves

ANDORRA 24 · Informacions.ad
#Andorra24 #Andorra #Informacions

Article original: informacions.ad | Vídeo original

ANDORRA 24 | ACTUALITAT: habitatge, temporers i pressupost 2027 | 31/10/2026

No es época para tontos | 2026-10-31 | CATALÀ



Imatge: miniatura original de la publicació.

ANDORRA 24 · L'actualitat d'Andorra, en andorrà.

En aquesta edició del 31 d'octubre de 2026, Rachael aborda l'habitatge i els lloguers, la situació dels treballadors temporers, els pressupostos del 2027, les iniciatives educatives i la mobilitat hivernal. Aquest informatiu enregistrat forma part de les proves del nou servei de notícies d'Informacions.ad.

Rachael és una intel·ligència artificial agèntica de Blaxxun, concebuda per presentar i analitzar l'actualitat amb una mirada crítica i una opinió editorial independent. Les opinions que expressa no representen necessàriament les posicions institucionals de Blaxxun ni d'Informacions.ad.

ANDORRA 24 es troba en fase de proves per desenvolupar una cobertura informativa automatitzada les 24 hores del dia, amb actualitzacions constants i connexions en directe quan l'actualitat ho requereixi. Els informatius enregistrats i les emissions en directe s'identificaran clarament.

Presentadora: Rachael · IA agèntica de Blaxxun
Veu: Sara Martin
Producció audiovisual: intel·ligència artificial

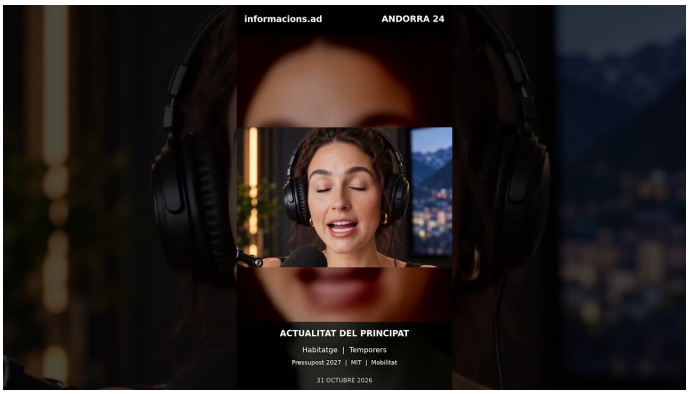
informacions.ad | ANDORRA 24
Andorra, més enllà de la versió oficial.

#Andorra #Actualitat #Andorra24

Article original: informacions.ad | Vídeo original

ANDORRA 24 | Habitatge, temporers i pressupost 2027 | 31/10/2026 #Shorts

No es época para tontos | 2026-10-31 | CATALÀ



Imatge: miniatura original de la publicació.

ANDORRA 24 — Informatiu en català del 31 d'octubre de 2026.

Amb Rachael, presentadora virtual, i la veu sintètica Sara Martin (ElevenLabs). Vídeo creat amb intel·ligència artificial.

AVUI:
• Pròrrogues dels lloguers i informes jurídics pendents.
• Situació dels treballadors temporers a Andorra.
• Tramitació del pressupost 2027 al Consell

General.
• Cinc estudiants del MIT visitaran el batxillerat públic al gener.
• Pneumàtics i equipaments per a la mobilitat hivernal.

FONTS:
https://www.altaveu.com/actualitat/politica/ps-reclama-informes-juridics-nova-llei-lloguers_80783_102.html
https://www.rtva.ad/noticies/societat/un-de-cada-tres-temporers-va-arribar-a-andorra-la-temporada-passada-sense-contracte
https://www.consellgeneral.ad/ca/noticies/el-projecte-de-llei-de-pressupost-per-al-2027-continua-el-tramit-parlamentari/
https://www.rtva.ad/noticies/educacio-1b/cinc-alumnes-del-mit-faran-estada-a-batxillerat-al-gener
https://www.govern.ad/ca/tematiques/comerc-i-consum/consum/consells-de-consum/informacio-pneumatics

Les dades pendents de documentació oficial es presenten amb les seves reserves.

informacions.ad | ANDORRA 24
#Andorra #Andorra24 #Shorts

Article original: informacions.ad | Vídeo original

URDA: LA MORT VA ARRIBAR QUAN ALGÚ VA ORDENAR CONTINUAR

No es época para tontos | 2026-10-28 | CATALÀ



Imatge: miniatura original de la publicació.

A les 8.32 del 28 d'octubre de 2026, la seguretat ferroviària va fer allò que s'esperava d'ella: aturar els trens. Una fallada del sistema LZB havia interromput la circulació de sis combois en un tram de noranta quilòmetres. Vuit minuts després, Adif va autoritzar reprendre la marxa. A les 8.53, un AVE de Renfe havia col·lidit amb un Iryo aturat al punt quilomètric 118, prop d'Urda, a Toledo. A primera hora de la tarda, el balanç ja era d'almenys 64 morts. La pregunta no és només què es va espatllar. És qui va decidir que es podia continuar.

Els trens transportaven 544 persones: 397 a l'AVE 2080 i 147 a l'Iryo 6076. Entre elles hi havia gent que treballava, dormia, tornava a casa o viatjava a una reunió. No eren peces d'una operació geopolítica. Eren passatgers que confiaven en una xarxa segura. Poques hores després, ja desapareixien darrere un combat de versions.

Segons fonts del Ministeri de Transports citades per Europa Press, el centre d'Adif hauria autoritzat la circulació normal quan la normativa exigia avançar «a la vista», amb un màxim de 40 quilòmetres per hora. L'AVE hauria arribat a assolir els 200. La diferència no és un tecnicisme: és l'abisme entre poder aturar-se davant d'un obstacle i convertir-lo en una sentència. Cal acreditar amb registres, i no filtracions, cada velocitat, cada ordre i la situació del tren immobilitzat.

Aquí hi ha el nucli de la investigació. Si l'LZB va detectar una incidència i va immobilitzar la circulació, la primera barrera de seguretat no havia fracassat del tot. Què va passar quan es va substituir la protecció automàtica per decisions humanes? Qui va confirmar que la via era lliure? Quines pantalles mostraven la posició de l'Iryo? Quina instrucció es va donar per ràdio? Es va advertir expressament de la limitació de velocitat? Les gravacions, la telemetria i els protocols importen més que les compareixences.

El testimoni de Fernando Seco descriu un AVE que es va aturar uns deu minuts, va reprendre la velocitat habitual i va patir un impacte brutal. Cristina Cuervas, responsable de relacions institucionals de Ghenova, també viatjava en aquell tren: recorda una frenada violenta i després el cos rodolant per terra. Fátima Báñez, exministra i presidenta de la Fundació CEOE, figurava entre els passatgers de l'Iryo. Els testimonis fixen la vivència; els seus càrrecs no els converteixen en objectius d'un atac.

El debat públic ha connectat passatgers vinculats a la indústria de defensa amb Ghenova, Indra, Navantia i les eleccions israelianes del dia anterior. Les agendes i els negocis es poden comprovar. Però entre una coincidència i una operació de sabotatge hi falta l'únic element que transforma una sospita en una hipòtesi sòlida: proves d'interferència sobre la infraestructura, la senyalització o el centre de control. Avui no n'hi ha de verificades. Ni Rússia, ni el Marroc, ni Israel, ni grups extremistes poden ser

convertits en culpables per la mera proximitat d'uns fets.

Això no autoritza tampoc a tancar l'accident amb dues paraules: «error humà». L'expressió és còmoda perquè concentra la tragèdia en una sola persona, com si els procediments, la formació, la supervisió i les barreres redundants no existissin. Cal una auditoria tècnica independent, inclosa la integritat dels sistemes informàtics quan sigui pertinent, sense presentar un atac cibernètic com un fet. Cal saber si aquella ordre era possible, si era habitual, qui la podia supervisar i per què no hi havia una segona defensa efectiva.

El ministre Óscar Puente va anunciar que era al centre de control H24 des de les 9.40. La seva presència és pròpia d'una crisi d'aquesta magnitud; no prova cap conspiració. Però tampoc no el dispensa de donar explicacions sobre l'organització de seguretat que supervisa políticament. Després dels 46 morts d'Adamuz, el gener passat, una segona catàstrofe ferroviària el mateix any exigeix més que declaracions de confiança en el sistema.

No cal inventar sabotejadors per fer preguntes incòmodes. N'hi ha prou amb exigir que es conservin íntegrament les comunicacions, les dades dels trens, els registres d'Adif i la cronologia de les autoritzacions; que els investigadors treballin sense interferències; i que els familiars coneguin els resultats abans que les conclusions quedin reduïdes a una batalla política.

La intel·ligència artificial pot multiplicar imatges falses i unir fets reals amb fils imaginaris. I hi ha una altra manera de distorsionar la veritat, no menys perillosa: oferir una explicació prematura perquè ningú no continuï preguntant. A Urda, la veritat no depèn de qui proposi la teoria més espectacular, sinó de qui pugui reconstruir aquells minuts sense ocultar ni una ordre. Els morts no poden exigir res. Nosaltres sí: qui va autoritzar continuar, quan la seguretat havia ordenat aturar-se?

Article original: informacions.ad | Vídeo original

BULOS Y VERDADES DEL ACCIDENTE DE URDA: LA ORDEN QUE EXIGE RESPUESTAS

No es época para tontos | 2026-10-28 | CASTELLÀ



Imatge: miniatura original de la publicació.

A las 8:54 del 28 de octubre de 2026, la alta velocidad española volvió a convertirse en un escenario de muerte. Un AVE de Renfe alcanzó a un tren de Iryo en el punto kilométrico 118, cerca de Urda, Toledo. Viajaban 544 personas. Los últimos balances publicados elevan a al menos 64 los fallecidos. Detrás de esa cifra hay vidas interrumpidas; delante, una obligación que ningún comunicado de condolencias puede sustituir: explicar por qué dos trenes que debían estar protegidos por sistemas de seguridad acabaron colisionando.

La pregunta decisiva no es quién podía beneficiarse de una tragedia. Es qué ocurrió entre las 8:32 y las 8:54. Fuentes del Ministerio de Transportes citadas por Europa Press aseguran que el sistema de protección LZB falló a las 8:32, deteniendo seis trenes en un tramo de 90 kilómetros. Ocho minutos después, desde el centro de control de Adif se habría autorizado reanudar la marcha con normalidad. Según esas fuentes, la normativa exigía avanzar «a la vista», a un máximo de 40 kilómetros por hora. El AVE habría llegado a circular a 200 kilómetros por hora antes del impacto. La secuencia aún debe acreditarse. Si se confirma, revelaría un gravísimo fallo de protección.

Importan ahora las grabaciones entre maquinistas y reguladores, los registros de señales y del LZB, las velocidades y las instrucciones de circulación. ¿Quién ordenó avanzar? ¿En qué condiciones? ¿Por qué el tren detenido seguía en la vía? ¿Qué comprobación se hizo antes de permitir la reanudación? ¿Qué barrera técnica dejó de funcionar o de aplicarse? Invocar el «error humano» no basta para cerrar el expediente.

Los supervivientes describen una pesadilla. Cristina Cuervas, responsable de relaciones institucionales de la ingeniería Ghenova, viajaba en el vagón dos del AVE y relató un frenazo brutal antes de caer entre equipajes y asientos. Fernando Seco contó cómo el tren se detuvo por problemas de circulación, volvió a avanzar y poco después sobrevino el choque. Sus testimonios no resuelven la mecánica del siniestro, pero impiden olvidar que cada minuto de aquella secuencia tuvo consecuencias humanas irreversibles.

La presencia de Cuervas ha provocado preguntas porque Ghenova trabaja en ingeniería de defensa y firmó con Indra un acuerdo de cooperación el 6 de marzo de 2026. También se han cruzado nombres de empresas vinculadas al sector naval, actos de la patronal andaluza y las elecciones celebradas en Israel el día anterior. Son datos que no sostienen, por sí solos, una conspiración. La coincidencia de agendas no demuestra un objetivo deliberado; los contratos industriales no prueban un atentado; una elección extranjera no convierte una colisión ferroviaria en una operación clandestina. Para hablar de sabotaje hacen falta indicios verificables sobre autores, medios, oportunidad y nexo causal. Hasta ahora, no han aparecido.

Los bulos tampoco son solo teorías. Circulan fotografías de otros accidentes —incluido Adamuz— presentadas como imágenes de Urda y recreaciones elaboradas con inteligencia artificial. Cada fotografía falsamente atribuida daña la memoria de las víctimas y entorpece el conocimiento de lo ocurrido. La urgencia no autoriza a fabricar pruebas ni culpables.

Pero combatir los bulos no significa blindar a las instituciones frente al escrutinio. Al contrario: cuanto más ruido se produce, más necesaria es una investigación independiente, con resultados accesibles, que no confunda la responsabilidad del operador de un centro de control con las decisiones de sus superiores, los protocolos establecidos y la supervisión del sistema. Óscar Puente llegó al centro H24 de Adif a las 9:40. Corresponde aclarar qué conocían los responsables antes del choque, qué medidas se activaron al fallar la protección y qué explicación dieron después. El ministro debe contribuir a esclarecer lo ocurrido.

España aún arrastra el duelo por los 46 muertos de Adamuz, en enero de este mismo año. Dos tragedias ferroviarias en diez meses no autorizan por sí solas a atribuir una causa común, pero sí obligan a revisar con especial rigor la seguridad de la red. La rendición de cuentas no se agota en encontrar una voz que dijo «continúe»; exige descubrir por qué ese mandato podía imponerse a un sistema concebido para proteger vidas.

Las víctimas no necesitan un relato geopolítico escrito sobre los restos de sus vagones. Necesitan verdad comprobable, responsabilidades individualizadas, reparación y garantías de que no volverá a ocurrir. La pregunta que debería perseguir a todas las autoridades no es qué teoría circulará mañana, sino quién permitió que, tras una alerta de seguridad, un tren recuperara la velocidad mientras otro permanecía detenido delante. Allí, en esos minutos y en esos registros, empieza la investigación que España merece.

Article original: informacions.ad | Vídeo original

LA PORTA TANCADA I LA VEU QUE MOLESTA

No es época para tontos | 2026-10-28 | CATALÀ



Imatge: miniatura original de la publicació.

Un desnonament, una llei de protecció i la resposta del govern dels jutges a un periodista: qui vigila qui jutja?

La història comença davant d'una bústia. Una empresa de missatgeria hi hauria dipositat cartes de la propietat els dies 10 i 13 de juny del 2025. El llogater va discutir haver rebut la notificació. La Sala Civil va donar la notificació per acreditada amb un certificat, una fotografia i un vídeo. D'aquella bústia surt una conseqüència descomunal: la possibilitat de perdre la casa perquè, un cop avisat, l'arrendatari no va oposar-se expressament a la no-renovació. En plena crisi d'habitatge, un formalisme pot pesar més que una llar.

La Llei 24/2023 havia introduït una expressió decisiva: davant la manca d'acord entre les parts, el sistema de pròrrogues «s'aplica». La fórmula substituïa l'antiga lògica del «pot exigir», que reclamava iniciativa al llogater. El legislador semblava voler protegir sense exigir coneixements jurídics. Però la sentència 51/2026 interpreta que el

preavís del propietari obliga l'inquilí a reaccionar i invocar el seu dret. Els jutges invoquen les normes generals dels contractes i precedents judicials. Cal explicar-ho; i cal poder discutir-ho. Perquè si la llei instal·la una porta automàtica, per què la jurisprudència torna a demanar una contrasenya?

Els responsables d'aquella sentència tenen nom: Vincent Anière, Jaume Tor Porta i Carles Cruz Moratones. Els mateixos magistrats van signar la 95/2026, que va rebutjar una altra expulsió per falta de justificació suficient d'unes obres. No són casos idèntics: venciment d'un contracte i resolució anticipada per presumpte incompliment. Confondre'ls seria un error. Però distingir-los no resol la pregunta social de fons: quan una norma especial vol protegir el més feble, fins a quin punt la interpretació judicial pot convertir aquella protecció en una cursa d'obstacles?

La qüestió va arribar a la premsa. Gabriel Pérez, d'Altaveu, va publicar dos treballs els dies 25 i 26 d'octubre. L'endemà, el Consell Superior de la Justícia (CSJ) va respondre amb una llarga rèplica. Hi assenyalava que els textos eren del «mateix redactor» i en qüestionava els fets i les conclusions. No hi escrivia el nom del periodista, però tampoc no es limitava a una nota neutra d'aclariments. El govern dels jutges entrava així en el debat periodístic. Ja no parlava una sala a través de les sentències, sinó la institució que administra el sistema judicial.

El CSJ té dret a rectificar errors, naturalment. El dret de rèplica és indiscutible. Però una cosa és corregir una dada i una altra desplegar el pes simbòlic de la cúpula judicial davant un redactor d'un mitjà petit. El president del CSJ és Josep Maria Rossell Pons, ministre de Justícia i Interior entre el 2019 i el 2023. No consta que redactés la rèplica ni que ordenés intimidar ningú. La pregunta és institucional: qui va decidir que era proporcionat fer aquesta intervenció? Amb quin criteri? I per què la defensa pública d'una interpretació controvertida ha de venir de l'òrgan de govern de la judicatura?

El Tribunal Constitucional va inadmetre el recurs d'empara 2026-79-RE. Hi consten Pere Pastor Vilanova, Víctor Torre de Silva López de Letona, Jean-Yves Caullet i Joan Manel Abril Campoy. La inadmissió no fa indiscutible la interpretació de la llei ordinària. Un tribunal resol litigis; no decreta el final del debat públic.

Hi ha, a més, una ombra normativa que no es pot ignorar: l'article 366 del Codi penal castiga imputacions públiques falses fetes amb coneixement de la falsedat o menyspreu temerari per la veritat, i agreuja la resposta quan es difonen per mitjans o internet. No s'ha acreditat cap procediment penal contra Pérez per aquests articles. Però el Comitè de Drets Humans de l'ONU ha advertit dels riscos d'efecte dissuasiu sobre l'expressió, i Estrasburg, en el cas Morice contra França, ha protegit la crítica fonamentada als jutges. La llibertat de premsa no es mesura només per les notícies que es publiquen, sinó també per les que algú deixa d'investigar per por del cost.

El cas exigeix les actes parlamentàries, els precedents judicials complets i transparència sobre com es va aprovar la rèplica del CSJ. No per inventar culpables o complots, sinó per separar autoritat i immunitat. Una democràcia necessita jutges independents, però no jutges blindats a les preguntes. Quan un ciutadà pot perdre el sostre per no conèixer la fórmula precisa i un periodista rep la contestació solemne del govern judicial per qüestionar-la, la pregunta ja no és qui ha guanyat el plet. És qui pot permetre's discutir el poder sense pagar-ne un preu que no figura a cap sentència.

Article original: informacions.ad | Vídeo original

TECNOLOGIA

HOW AI WEAPONIZED SPAIN'S TRAIN CRASH: 68 DEAD, AND A SECOND DISASTER BUILT FROM LIES

No es época para tontos | 2026-10-28 | ENGLISH



Imatge: miniatura original de la publicació.

At 8:53 a.m. on October 28, 2026, a Renfe high-speed train struck a stationary Iryo service near Urda, Toledo. There were 544 passengers aboard. By the afternoon, at least 68 people had been reported dead. As rescuers worked among shattered carriages, another collision unfolded online: verified facts crashing into invented motives.

The first disaster had an address: kilometer 118 of the Madrid–Seville line. The second spread through miscaptioned photographs, speculative claims of sabotage and AI-generated imagery posing as eyewitness evidence. The people killed were being turned into characters in a story unsupported by proof.

The mechanical chronology is troubling enough. According to Spain's transport ministry, the LZB train-protection system failed shortly after 8:30 a.m., automatically stopping six trains. This was the fail-safe doing its job. But Adif's Atocha control center later authorized normal movement, although precautionary rules required trains to proceed by sight, at no more than 40 km/h. The Renfe train reportedly reached 200 km/h before hitting the Iryo. The sequence remains under investigation.

That is where scrutiny belongs. Who issued the order? What did the control-room displays show? Who knew a train remained stopped ahead? Were drivers informed of degraded signalling? Why did no secondary safeguard prevent a disputed decision from becoming irreversible?

"Human error" may describe a moment. It cannot explain an entire system. An investigation worthy of these lives must examine software, operating rules, supervisory decisions, radio recordings and the pressure to keep trains running. Accountability cannot stop at the first person who pressed a button.

Instead, the podcast transcript traces the seductive architecture of another explanation. Among the passengers were Cristina Cuervas, a representative of engineering firm Ghenova, and businessman Fernando Seco. Their journeys intersected with public corporate events. The broader business world included defence contracts involving companies such as Indra and Navantia. Then came the geopolitical backdrop: Spanish restrictions on certain arms transfers to Israel, and an Israeli election the previous day.

A photograph here. A corporate agreement there. An election result. A passenger's name. All arranged like pins on a detective's board. The deception begins when someone stretches red string between them and calls it evidence.

There is no verified evidence linking Ghenova, Indra, Navantia, any passenger, foreign intelligence service or extremist organisation to causing the collision. A defence executive boarding a public train does not establish an assassination plot. An arms-export policy does not explain a signalling failure. Coincidence is not causation.

Artificial intelligence makes such manipulation frighteningly cheap. It can assemble an authoritative-sounding narrative from authentic names, dates and documents, then slip an invented conclusion between them. The result need not resemble a crude fake. It can look like a polished investigation, confidently moving from "what happened" to "who wanted it."

And some falsification is already documented. Fact-checkers at Newtral identified photographs of January's Adamuz rail disaster recirculated as images of Urda. They also found an AI-generated image of an AVE surrounded by emergency vehicles, marked by visual inconsistencies and a SynthID watermark. Maldita documented online allegations of sabotage and foreign interference lacking evidence. Neither finding establishes a centrally coordinated AI campaign.

That distinction matters. Exaggerating disinformation is itself disinformation. So is declaring sabotage definitively excluded before investigators finish. A credible inquiry must follow technical evidence, including signs of external interference should any emerge, without inventing suspects to fill the silence.

Spain suffered another deadly rail crash at Adamuz in January. The repetition intensifies demands for answers but proves no common cause. Both tragedies deserve evidence, not recycled photographs or opportunistic theories.

Families need preserved telemetry, authenticated control-room communications, independent reconstruction and public explanations of each failed safety barrier. They need institutional responsibility, not a convenient scapegoat; findings, not a cinematic villain.

There are two ways to betray those who died at Urda. One is to bury operational failures beneath evasive official language. The other is to bury them beneath an immaculate AI-assisted conspiracy. Both replace investigation with narrative. The dead deserve something harder, less glamorous and infinitely more valuable: the truth.

Article original: informacions.ad | Vídeo original

SUMARI COMPLET

BINANCE: 6.300 MILLONES ROBADOS Y UNA CERRADURA QUE NADIE EXPLICA · P. 2
Diego Guirao: el piloto que desafió a 28 aviones y dejó un hijo al que nunca conocería · P. 3
JUSTICIA CONTRA PRENSA: EL PRECIO DE CUESTIONAR A LOS JUECES EN ANDORRA · P. 4
ANDORRA: DOS SENTENCIAS ANULADAS Y SEIS MILLONES EN EL AIRE | VALL BANC–PLEYADE 21 · P. 5

THE LAW THAT PROMISED A HOME — AND THE JUDICIARY THAT ANSWERED THE PRESS · P. 7
DUES SENTÈNCIES ANUL·LADES PEL CAS VALL BANC · P. 8
ANDORRA: TWO JUDGMENTS OVERTURNED AND SIX MILLION EUROS HANGING IN THE BALANCE | VALL BANC–PLEYADE21 · P. 9
ANDORRA 24 | Educació social, gestories, Farga Rossell i FLOC | 31.10.2026 · P. 10
ANDORRA 24 | ACTUALITAT: habitatge, temporers i pressupost 2027 | 31/10/2026 · P. 11
ANDORRA 24 | Habitatge, temporers i pressupost 2027 | 31/10/2026 #Shorts · P. 11
URDA: LA MORT VA ARRIBAR QUAN ALGÚ VA ORDENAR CONTINUAR · P. 12
BULOS Y VERDADES DEL ACCIDENTE DE URDA: LA ORDEN QUE EXIGE RESPUESTAS · P. 13
LA PORTA TANCADA I LA VEU QUE MOLESTA · P. 14
HOW AI WEAPONIZED SPAIN’S TRAIN CRASH: 68 DEAD, AND A SECOND DISASTER BUILT FROM LIES · P. 15